



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, Diecinueve (19) de agosto dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	MARIA CECILIA GIRALDO GIRALDO
DEMANDADO:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO:	050013105 – 020-2019-00030-01
ACTA N°:	54

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso del trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **MARIA CECILIA GIRALDO GIRALDO** en contra de **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.**, para pronunciarse en virtud del recurso de apelación de **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.** y en grado jurisdiccional de consulta a **COLPENSIONES**, frente a la sentencia con la cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 54** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

La DEMANDANTE pretende con este proceso básicamente lo siguiente: **i)** Que se **DECLARE** la nulidad o la ineficacia o la inexistencia del traslado de la actora del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual por lo que resulta nula o ineficaz o inexistente la afiliación a los fondos PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. y se **DECLARE** que las cosas deben volver al estado en el que se encontraban y por lo tanto que PORVENIR S.A. debe entregar o trasladar a COLPENSIONES el valor de los aportes recibidos por la afiliación, cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto que esté en la cuenta de la actora. Así mismo, solicita que sea nulo o ineficaz o inexistente cualquier reconocimiento prestacional que haya realizado o llegue a realizar PORVENIR S.A., tal como pensión de vejez o devolución de aportes u otro derivado de la afiliación al RAIS; **ii)** COLPENSIONES debe **RECIBIR** a la demandante

¹ 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 2 – 11 / PDF

como afiliada en el RPM, declarando que no existió solución de continuidad, que **COBRE** o **RECIBA** todos los valores depositados en la cuenta de ahorro individual recibidos por la afiliación y que REALICE el cómputo de semanas cotizadas por toda la vida laboral; Y se **CONDENE** a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. al reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales causados a la accionante, los cuales estiman en 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes; **iii)** Que se **CONDENE** a los demandados al pago de costas.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** La demandante nació en enero 30 de 1964. En su vida laboral laboró para diferentes empleadores en los que realizó aportes o cotizaciones al Régimen de Prima Media, antes I.S.S., hoy COLPENSIONES. Se trasladó al Régimen de Ahorro Individual mediante afiliación a PROTECCIÓN S.A. en el mes de agosto de 1995. En febrero de 1999 suscribió formulario de afiliación a PORVENIR S.A. **ii)** Las personas o promotores de los fondos privados de pensiones, NO asesoraron de manera técnica y adecuada a la parte demandante a la hora de tomar la decisión de trasladarse del RPM al RAIS, ya que, por ejemplo, no se le explicaron las características y requisitos de cada uno de los regímenes pensionales existentes, con sus ventajas y desventajas, lo cual no permitió que se realizara un análisis mínimo de cuál de los dos le era más beneficioso para sus intereses. **iii)** La decisión de trasladarse no fue espontánea, ni voluntaria, ni libre, pues al ocultársele información definitiva, se tomó la decisión bajo engaño, cautivada por las supuestas bondades del Sistema que le ofrecieron los promotores de los fondos privados, con el consentimiento inducido al error de que lo mejor para ella era el RAIS. Se le dijo que las administradoras del régimen de prima media, entre ellas el ISS, se iban a "quebrar" y que sus ahorros pensionales se podrían perder. No se le informó que cuando le faltaren 10 años para ajustar la edad ya no podría regresarse al RPM. **iv)** En síntesis, los Fondos Privados NO CUMPLIERON CON SU DEBER DE BRINDAR INFORMACIÓN PROFESIONAL. En diciembre de 2018 PORVENIR S.A. realiza una proyección pensional a mi poderdante, informándole los eventuales valores de su mesada pensional donde se informa que tendría derecho a una pensión de \$781.242, a los 60 años de edad, mientras que en el RPM la pensión equivaldría aproximadamente a los 57 años de edad \$1.529.207; habiendo una clara desmejora en el monto, por lo que según el artículo 53 de la constitución, este acto de afiliación no puede producir efectos pues "[...] los contratos no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".

2. CONTESTACIONES

2.1. COLPENSIONES²

Se **opuso a la prosperidad de las** pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal debiéndose en todo caso absolver a la entidad de ellas, señalando: **i)** Se

² 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 113 – 128 / PDF

OPONEN a la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, así como a recibir los valores que le retornen las AFP's, y por ende realizar el computo de las semanas cotizadas, toda vez que la demandante, manifestó libremente la voluntad de trasladarse inicialmente a PROTECCION S.A, Y posteriormente a POVENIR S.A, traslados que se realizaron en forma correcta, tal cual como lo indica el artículo 2 de la ley 797 de 2003 la cual modifico el Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal e. **ii)** Se **OPONEN** a la condena en costas y piden se condene en costas a la demandante. En todo caso, no se condene en costas a COLPENSIONES ya que siempre ha actuado conforme a derecho.

Propuso como excepciones: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR, IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PRETENDIDAS, BUENA FE, PRESCRIPCION.

2.2. PROTECCIÓN³

Se **opuso a la prosperidad de las pretensiones:** **i)** A la declaratoria de ineficacia o nulidad del traslado, toda vez que se trata de un acto existente, válido, exento de vicios en el consentimiento y que generó derechos y obligaciones para ambas partes. Además, la forma como hoy se liquida la pensión de vejez en el RAIS, no hace NULA la afiliación, pues la fórmula está consagrada tanto en la Ley 100 de 1993, artículos 64, 80, y 81 y resoluciones emitidas por la Superintendencia, como la 1555 y 3099 de 2015. Así, la declaratoria se hace es por vicios en el consentimiento, por lo que no puede pretenderse la ineficacia por las expectativas económicas insatisfechas, ya que si fuera favorable el monto, sí sería válida la afiliación. **ii)** A la pretensión de que las cosas vuelvan al estado anterior pues la demandante hizo uso del derecho de libre elección y sus traslados cumplen con lo establecido en el artículo 11 del decreto 692 de 1994, además de encontrarse inmersa en la prohibición de los 10 años. **iii)** A que se condene a PROTECCIÓN al reconocimiento de la indemnización de perjuicios pues la vinculación constituye un acto válido y luego de haber recibido una asesoría integral y completa, teniendo en cuenta todas las implicaciones de su decisión, de modo que no puede endilgársele responsabilidad a la sociedad y más aún cuando no existe prueba alguna que demuestre que PROTECCIÓN vició el consentimiento de la actora. En todo caso, no se demuestran los tres elementos constitutivos de responsabilidad como lo son el hecho generador, el daño causado y el nexo de causalidad entre uno y otro, pues el hecho generador es la decisión voluntaria de cambiarse de régimen y tampoco allega prueba sumaria de la supuesta afectación que alega haber sufrido, de modo que no sin daño no hay nexo causal que analizar.

Propuso como excepciones: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, FALTA DEL JURAMENTO ESTIMATORIO DE PERJUICIOS

³ 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigita Pág. 157 – 168, y luego continúa desde la Pág 193 - 204 / PDF

COMO REQUISITO PROCESAL, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, TRASLADO DE APORTES A PORVENIR, INNOMINADA O GENÉRICA.

2.3. PORVENIR S.A.⁴

En la contestación, la administradora del RAIS se opuso ante la prosperidad de las pretensiones solicitando se absuelva de todas y cada una de ellas a la demandada, indicando: **i)** El traslado inicial se hizo con PROTECCIÓN S.A. en 1995, y posteriormente la accionante reitera su voluntad libre e informadamente de permanecer en el RAIS en 1999 al vincularse con PORVENIR S.A., esto después de haber sido ampliamente asesorada sobre las implicaciones de su decisión y el funcionamiento del RAIS, manteniéndose en este durante 25 años con la expectativa legítima de pensionarse bajo las condiciones de este régimen y sin jamás expresar inconformidad alguna por una supuesta falta de información, ni solicitó su traslado teniendo amplios términos para hacerlo. Del mismo modo, no se presentan vicios en el consentimiento, ni dolo, ni causa u objeto ilícitos. **ii)** Plantea que de proceder la nulidad, el artículo 113, literal b de la ley 100 de 1993 indica que en un traslado se transferirán el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, por lo que no procede la condena de devolución de los gastos de administración, aunado a que el artículo 20 de la misma ley dispone también un 3% de la cotización en el RPM que es dirigida a financiar gastos de administración y contingencias, por lo que no forma parte de la financiación de la pensión de vejez, lo que lo hace estar sujeto a prescripción. Así mismo, invoca el concepto de la superintendencia financiera de enero 17 de 2000, el cual indica que no procede la devolución de primas de seguro previsional, que de trasladarse junto con los gastos de administración a Colpensiones, se configuraría un enriquecimiento ilícito a favor de esta demandada, en la medida en que no existe norma que disponga tal devolución. Si se ordena tal devolución, debería también la demandante restituir los frutos financieros según lo ha decantado la sala civil de la corte suprema tratándose de restituciones mutuas previstas en el artículo 1746 del código civil.

Propuso como excepciones: PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COMPENSACIÓN, EXCEPCIÓN GENÉRICA.

3. SENTENCIA⁵

En la audiencia del **23 DE MAYO DE 2022⁶** la **JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones: **i) DECLARAR** ineficaz el traslado de la señora MARÍA CECILIA GIRALDO GIRALDO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 43.543.354 del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-, por falta de consentimiento

⁴ 01PrimerInstancia → 07ContestacionDemandaPorvenir Pág. 1 – 51 / PDF

⁵ 01PrimerInstancia → 25ActaAudienciaJuzgamientoArt.80SENTENCIA Pág. 1 – 3 / PDF

⁶ 01PrimerInstancia → 24AudienciaJuzgamientoArt80Sentencia / Minuto 1:11:50 / VIDEO

informado, lo que conllevó a un error en el consentimiento de la demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., es decir, porque su decisión no fue libre y voluntaria, tal como se indicó en la parte motiva de esta sentencia. **ii) DECLARAR** que la afiliación al Régimen de Prima Media – RPMPD de la señora MARÍA CECILIA GIRALDO GIRALDO no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, según lo establecido anteriormente. **iii) CONDENAR** a PORVENIR S. A. a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a COLPENSIONES el cien por ciento (100%) de los aportes efectuados por la demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos los frutos y rendimientos financieros que sobre los mismos se hubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación de la demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de régimen pensional, **valores que deberán ser debidamente indexados**. En igual sentido, se CONDENAR a PROTECCIÓN S. A. a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a COLPENSIONES- con cargo a su propio patrimonio, los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos durante el lapso en que la demandante estuvo afiliada a esa administradora, valores que deberán ser **debidamente indexados**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. **iv) CONDENAR** a COLPENSIONES- a recibir los aportes que PROTECCIÓN S. A. y PORVENIR S. A. le devuelvan como resultado de la ineficacia decretada, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por la señora MARÍA CECILIA GIRALDO GIRALDO como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral. **v) DECLARA** la improsperidad de las excepciones formuladas por las demandadas, salvo la de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN formulada por PROTECCIÓN S. A. y PORVENIR S. A. tratándose exclusivamente de la pretensión relativa al **reconocimiento y pago de perjuicios morales y materiales**, razón por la cual se les ABSUELVE de condena alguna por tal concepto; así como la de IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR EN COSTAS formulada por COLPENSIONES. **CONDENA** en costas a PROTECCIÓN S. A. y a PORVENIR S. A.

4. RECURSOS

4.1 RECURSO DE APELACIÓN DE PROTECCIÓN S.A⁷

⁷ 01PrimerInstancia → 24AudienciaJuzgamientoArt80Sentencia / Minuto 1:21:55 / VIDEO

La entidad presenta inconformidad parcial respecto a **la condena de devolver los conceptos de cuota de administración y seguro previsional a Colpensiones**, y al respecto solicita se revoquen parcialmente la sentencia, indicando que: **a)** La sociedad mi representada realizó una excelente gestión de administración de la cuenta de ahorro individual lo que se evidenció en los altos rendimientos generados, ordenar trasladar tales cuotas sería 1) desconocer la gestión realizada por la AFP, 2) como no reconocer el derecho a las restituciones mutuas del artículo 1746 del código civil, 3) además de generarse un enriquecimiento sin causa para Colpensiones, entidad que nunca administró la cuenta de la demandante. **b)** Recuerda la sociedad que estos descuentos por cuotas de administración son realizados toda vez que la ley 100 en su artículo 20 autoriza a realizar estos descuentos, los cuales se realizan en igual proporción en el RPM. **c)** Estos descuentos tiene una naturaleza diferente a la naturaleza de la pensión, por lo que podríamos hablar de prescripción parcial de estas cuotas. **d)** El seguro previsional es pactado con un tercero de buena fe al que mes a mes se le ha pagado para mantener vigentes las pólizas que cubren diferentes siniestros, terceros que ni siquiera fueron vinculados al proceso.

4.2 RECURSO DE PORVENIR⁸

La sociedad en su oportunidad solicita sea revocada en su totalidad la sentencia y para ello centra su argumentación en dos puntos, a saber: **i) La declaratoria de ineficacia** debido a que: **a)** La demandante es una persona mayor de edad que tomó una decisión de manera libre y voluntaria luego de que mi representada entregó la información debida. **b)** La demandante debía conocer la información que les permitió tomar la decisión de trasladarse de régimen pensional, sin que se pueda deducir que porvenir abusó de su condición dominante. Además de ello, el artículo 9 del código civil indica que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, y en el proceso no se acredita alguna circunstancia especial que haya impedido a la demandante conocer la ley 100 de 1993, pues es una norma de contenido público que manifiesta la normal la obligatoriedad, los requisitos, los criterios, condiciones que debían conocer los demandantes al vincularse. A cerca de **ii) La devolución de gastos de administración** plantea que: **a)** El fallo de primera instancia desconoce el artículo 13 de la ley 100 de 1993, el concepto de la super intendencia financiera de Colombia del 17 de enero de 2020, pues estos textos indican los valores a retornar en un traslado de régimen, cuales son aportes y rendimientos, de modo que no hay lugar a la devolución de gastos de administración u otras sumas, debido a que este cobro se causa debido a la gestión administrativa y la cobertura de las contingencias. **b)** Se trata de obligaciones de tracto sucesivo que no es posible generar una devolución, pues su naturaleza permite la aplicación a la figura de prescripción sobre dichas sumas teniendo en cuenta que le es aplicable tal figura. **c)** Si se ordena tal devolución, se estaría generando un

⁸01PrimeralInstancia → 24AudienciaJuzgamientoArt80Sentencia / Minuto 1:27:40 / VIDEO

enriquecimiento sin justa causa para Colpensiones, pues esta entidad no ha generado administración alguna.

4.3 LA APELACIÓN DE COLPENSIONES⁹

El apoderado de la entidad administradora del RPM **solicita se revoque la sentencia de primera instancia**, presentando inconformidad respecto **a la declaratoria de ineficacia**; y para ello hace un recuento de la evolución normativa de las obligaciones de las AFP's al momento de realizar un traslado y de este modo poder determinar si efectivamente estas no proporcionaron al momento del traslado -y bajo la normatividad vigente para la fecha en que se suscribió el formulario de afiliación- una clara, oportuna y completa asesoría con información, en relación a las ventajas y desventajas del régimen. Es así como trae a colación el decreto 663 de 1993, la ley 1328 de 2009, el decreto 2241 de 2010, de la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015, la circular externa #16 de 2016 de la super intendencia financiera. Una vez menciona tales normas, atendiendo al análisis de la información suministrada por cada una de las AFP's privadas, y el alcance de la asesoría que brindan al momento de la afiliación, infiere que atendiendo a la fecha en que se realizaron los traslados, la normatividad no era tan exigente en cuanto a la información que debía brindarse, por lo que la asesoría fue acorde a las exigencias legales para el momento, no habiendo entonces causal de ineficacia, de modo que solicita se revoque la sentencia.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia, **COLPENSIONES¹⁰** intervino solicitando se revoque la sentencia del A Quo y en su defecto se desestimen las pretensiones, de nuevo planteando inconformidad ante **la declaratoria de ineficacia** por: **a)** Las partes del proceso son capaces, no existió objeto o causa ilícita, por lo que se cumplen con los requisitos para obligarse del artículo 1502 del código civil, por lo que la parte tenía la capacidad de discernir cuál régimen le era más favorable. **b)** No se trata de una ineficacia lo que alega la demandante sino de una nulidad relativa, la cual tampoco es aplicable por no haberse demostrado un vicio en el consentimiento como error, fuerza o dolo y se sana por prescripción de 4 años desde la celebración del negocio, y en este caso la demandante alega su propia culpa debido a que no se trasladó en un momento oportuno. **c)** Sobre la demandante, recaían deberes y obligaciones (decreto 2241 de 2010) y la actora cimenta la ineficacia en la mala ejecución del buen concejo y debida asesoría que tienen las AFP's situación que ubica al margen de la Litis a Colpensiones, no tuvo ninguna clase de participación

⁹01PrimeralInstancia → 24AudienciaJuzgamientoArt80Sentencia / Minuto 1:41:03 / VIDEO

¹⁰ 02SegundaInstancia → 05AlegatosColpensiones Pág. 1 - 9 / PDF

o injerencia en el acto constitutivo del traslado de régimen pensional. **d)** En el proceso se ha evidenciado que la demandante no registra cotizaciones en el RPM, ni que estuvo afiliado a este régimen, por lo que se configuraría una falta de legitimación en la causa por pasiva y un cobro de lo no debido respecto a Colpensiones. Además, se encuentra inmersa en la restricción legal de traslado (SL 1452 de 2019, la C-086 de 2016, SL 1251 de 2020). **e)** La asesoría debe restringirse a informar al afiliado de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad del afiliado y recuerda el principio de sostenibilidad financiera, pues considera que declarar la ineficacia genera una descapitalización infundada de la entidad, obligándola a soportar una carga financiera considerable sin que se tenga la obligación legal (T-073 de 2019 y T-489 de 2010)

PORVENIR¹¹, entidad que en el recurso de apelación presentó inconformidad respecto a **la declaratoria de ineficacia y los valores a devolver** y en consecuencia solicita REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia. **i) Sobre el primero punto** indicó que: **a)** No se alegó ni probó los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil, para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del traslado, pues no hay objeto o causa ilícita, ni fue celebrado por una persona absolutamente incapaz; así como tampoco se probaron vicios en el consentimiento como error, fuerza o dolo que establece el artículo 1508 del mismo cuerpo normativo, ni aplica la causal del artículo 899 del código de comercio. **b)** De presentarse alguna irregularidad, estaría saneada conforme los artículos 1742 y 1743 del citado código, por la ratificación tácita de la parte demandante, al permitir durante todo el tiempo de permanencia en el régimen privado, el descuento del aporte con destino al régimen privado. **c)** No se puede desconocer que Porvenir S.A siempre le garantizó el derecho de retracto, conducta que se prueba con la publicación que realizó en el diario el Tiempo el 14 de enero de 2004 por mandato del artículo 3 del decreto 1161 de 1994, sin que la demandante hiciera uso de tal facultad, lo que debe valorarse como negligencia de su parte. **d)** Se cumplió con la carga procesal impuesta, pues aportó los documentos que tenía su poder para demostrar que la parte actora ha estado vinculada producto de una decisión libre e informada, además de la verificación de la voluntad del afiliado por su conducta de permanecer y permitir descuentos como lo establece la sentencia con Rad. 47236 del 06 de abril de 2016. Frente a **ii) Las sumas a devolver** plantea que en caso de que se mantenga la ineficacia: **a)** Invoca el artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993, y el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia con radicación No. 20191522169-003-000 del 17 de enero de 2020, y aduce que sí están sujetos al fenómeno previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, y así deberá declararse. **b)** Y el salvamento de voto de la sentencia de tutela 5912 del 13 de mayo de 2020

¹¹ 02SegundaInstancia → 07AlegatosPorvenir Pág. 1 - 8 / PDF

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del recurso de apelación de **COLPENSIONES, PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A.** y del grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de **COLPENSIONES**, lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico: En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. Así, se analizará en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la DECISION de DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN de la DEMANDANTE, verificando lo relativo a las sumas que se ordenan devolver.

6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.*

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir «libre y voluntariamente»** aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464- 2019, SL4360-2019, SL2611-2020 y SL4806-2020, SL 2208 -2021 – SL 3871-2021- SL 5686-2021- SL 5688-2021- SL 1055-2022** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014,** y el **Decreto 2071 de 2015,** lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado de la demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**
- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100,** en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003,** normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.
- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a esta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.
- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para el afiliado, sino que trasciende al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015,** pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil,** la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente

en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

7. EL CASO CONCRETO

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: **i) MARIA CECILIA GIRALDO GIRALDO** nació el **30 de enero de 1964** por lo que en este momento cuenta con **58 años**¹²; **ii)** Se afilió inicialmente al I.S.S. desde el **24 de septiembre de 1991** cotizando allí 38,57 semanas hasta 1992¹³; **iii)** Se trasladó del REGIMEN DE PRIMA MEDIA al de AHORRO INDIVIDUAL administrado por **PROTECCIÓN S.A.** – suscribiendo formulario de afiliación el **30 de agosto de 1995**¹⁴, trabajaba en INVAL como TECNÓLOGA. Posteriormente, se trasladó a **PORVENIR S.A.** – con solicitud de afiliación del **26 de febrero de 1999**¹⁵ trabajaba para el mismo empleador como TECNÓLOGA INTERVENTORA, entidad en la que se encuentra activa en la actualidad.

Las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por el actor, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como *"la afiliación se hace libre y voluntaria"*, *"se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones"* u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (**CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020**).

Pues bien, según lo acreditado en el proceso, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **MARIA CECILIA GIRALDO GIRALDO**, ésta tenía menos de **35 años** de edad y **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito sexto** de esta providencia y con el precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si la demandante era beneficiaria o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares, y mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que si permanecía en el I.S.S., el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 55 años de edad y acreditando 1000 semanas cotizadas, para

¹² 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 72 / PDF

¹³ 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 68 / PDF

¹⁴ 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 215 / PDF

¹⁵ 01PrimerInstancia → 01ExpedienteDigital Pág. 36 / PDF

pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85 % en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100.

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: i) Se podría pensionar antes de los 57 años, sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (artículo 64 Ley 100); ii) Como la demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía saber que las cotizaciones que habían efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo se redime en el caso de las MUJERES a los 60 años, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada, en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. iii) Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (artículos 79 a 82 de la Ley 100), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. iv) También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces debía seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 57 años, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA. v) Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Pero se observa con claridad que en el proceso no se acreditó por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES el haber suministrado esta información clara, completa y detallada, sin que se hubiese efectuado confesión en contra por la señora **MARIA CECILIA GIRALDO GIRALDO**, diligencia en la fue enfática en reiterar las afirmaciones de la demanda relativas a la ausencia de información completa. Debe entonces la Sala CONCLUIR, conforme las normas, jurisprudencia y acervo probatorio recaudado, que resulta procedente **CONFIRMAR** la decisión de **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN** por las razones de esta providencia.

Lo anterior, sumado al hecho de que, el traslado que hubiese efectuado la demandante a otra AFP en manera alguna convalida la omisión en las obligaciones de información en la vinculación inicial al RAIS. Recientemente la Corte Suprema en su Sala Laboral indicó en sentencia **CSJ SL 3349 de 2021**, que no puede desconocerse que un afiliado durante su vida laboral puede hacer varios traslados entre regímenes pensionales, o entre administradoras, sin que tal evento signifique que la AFP pueda omitir, en cada ocasión, el suministro de la información a que está obligada, con la calidad y en la oportunidad debidas so pretexto de una o varias vinculaciones anteriores. Y reiteró:

el hecho de tener sucesivas afiliaciones en el RAIS, después de haber abandonado el RPM, no tiene como consecuencia que de ello se derive una suerte de purga en el deber de información o de convalidación en su incumplimiento, tampoco el hecho de que el impugnante se haya vinculado, de manera discontinua al RAIS, aún con la misma administradora, significa per se que se tenga suficiente ilustración, conocimiento o comprensión de cada uno de los regímenes o que, se itera, tal situación releve del cumplimiento de sus deberes a la AFP, como lo exigen las normas aplicables en el momento en que acaezca tal evento.

Es decir, las administradoras siempre tendrán el deber de brindar información completa y veraz a los afiliados en cada vinculación, sin que pueda exonerarse de ella argumentando que el afiliado ya conocía previamente el régimen al que se vincula; Y sin que las sucesivas vinculaciones convaliden aquella que se hizo con vicios y dieron lugar a la declaratoria de ineficacia.

Y tampoco se comparte el análisis referido **al monto de la pensión de vejez en cada régimen**. Sobre el particular, la Alta Corporación también se ha pronunciado, en sentencias como la **SL 5686 – 2021** en la que indicó:

Recuérdese que el análisis judicial sobre el cumplimiento del deber de información a cargo de los fondos privados está al margen, en principio, de la situación pensional de la persona, por lo que no sería coherente exigir que se acredite que el traslado causó una lesión injustificada que impidió el acceso a un derecho pensional en abstracto, a menos que el litigio se dirija justamente a acreditar un perjuicio como pretensión complementaria, sin que esto incide en la declaratoria de ineficacia de traslado.

Y es que en un estadio de afiliación activa al sistema y más aún cuando el derecho pensional aún está en formación, los jueces no pueden elucidar en abstracto sobre la conveniencia de estar o permanecer en uno u otro régimen y los perjuicios que ello eventualmente acarrearía, pues cada uno de los modelos consignan características que pueden ser convenientes tanto para el afiliado como a sus eventuales beneficiarios en determinada situación particular.

A raíz de ello, la jurisprudencia de la Corte ha garantizado el *derecho básico* de los trabajadores a *recibir información necesaria, objetiva y transparente durante el proceso de traslado de régimen pensional*, como una garantía mínima consagrada en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que encuentra respaldo en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y se armoniza con artículo el 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra que cualquier estipulación que afecte o desconozca los derechos mínimos «no produce efecto» (CSJ SL3871-2021), de modo que incumplida esa prerrogativa, es imperativo declarar la ineficacia del traslado.

Debe destacarse que la ADMINISTRADORA DEL RAIS y COLPENSIONES en la contestación propusieron la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido

analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable por la prescripción - No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia **SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo **la ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. **v)** Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como **los gastos de administración, las comisiones (CSJ SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021)**, los porcentajes destinados a conformar el **Fondo de Garantía de Pensión Mínima** y los valores utilizados en **seguros previsionales** con cargo a sus propias utilidades (**CSJ SL2209-2021 y SL2207- 2021**). **vi)** Así, reconoce esta corporación que si bien existió

una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello, **PROTECCIÓN S. A., y PORVENIR S.A.** efectuarán la devolución en relación con los períodos en que la actora estuvo afiliada. **vii)** Por lo anterior, no se acogerá el argumento de **PORVENIR S.A.** respecto a que no deben trasladarse los gastos administración y prima de seguro previsional amparándose en el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia** que en manera alguna tiene carácter vinculante¹⁶ y en el que se invoca el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008 norma que fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multiafiliación¹⁷, situación que no corresponde a la aquí ventilada. **viii)** Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son inherentes (**CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014; CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**); **ix)** Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010 y SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021, SL 3709-2021 y SL 1055-22**, considera que lo

¹⁶ “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

¹⁷ **Decreto 3395 de 2008 ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que, al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Así, en este aspecto se CONFIRMARÁ la providencia que se revisa.

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia sólo se CONDENÓ en COSTAS a PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A, decisión que no fue cuestionada de manera concreta. **ii)** Y respecto a las **costas en esta instancia** al no prosperar los recursos interpuestos por PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, se causan a su cargo y en favor de la demandante. Agencias en derecho, 1 s.m.l.v. para cada una.

8. LA DECISIÓN

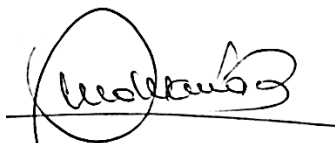
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**:

PRIMERO: Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**, agencias en derecho 1 s.m.l.v. para cada una

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 – 020-209-00030-01

SENTENCIA del //19/08/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,
para ello debe tener una cuenta de Microsoft.

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EvF8asWRqtVMnKlOuwGkV9cBCSokpoklWHCFJE4qgbZGgg?e=LzgK0l